

INFORME ASESORÍA EXTERNA SENADOR JUAN ANTONIO COLOMA

DICIEMBRE 2022

I. PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA Y COMPLEMENTA LAS NORMAS QUE INDICA RESPECTO DEL SISTEMA EDUCATIVO, BOLETÍN Nº 15.153-04

I.1 ANTECEDENTES DE TRAMITACIÓN DE LA INICIATIVA

- i) Fecha de ingreso:** 04 de julio de 2022
- ii) Iniciativa:** Mensaje
- iii) Cámara de origen:** Cámara de Diputados
- iv) Trámite constitucional:** Segundo trámite constitucional
- v) Trámite reglamentario:** Segundo trámite reglamentario, segundo informe de la Comisión de Educación y primer informe de la Comisión de Hacienda
- vi) Normas de quórum:** En el artículo 10º los numerales 2 y 3, así como el inciso primero del artículo cuarto transitorio, son normas orgánicas constitucionales, de conformidad con el inciso final del numeral 11 del artículo 19º de la Constitución Política de la República.
- vii) Leyes relacionadas con la iniciativa:**
 - Ley Nº 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública.

- Código del Trabajo.
- DFL Nº 1, de 1997, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican.
- Ley Nº 20.964, que otorga bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación que indica.
- Ley Nº 20.976, que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la Ley Nº 20.822.
- Ley Nº 20.910, que crea quince centros de formación técnica estatales.
- Ley Nº 21.109, que establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.
- Ley Nº 20.845, de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
- Ley Nº 17.301, que crea Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles.

- DFL Nº 2, de 2010, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del DFL Nº 1, de 2005, Ley General de Educación.
- DFL Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.
- DS Nº 20, de 2021, del Ministerio de Educación, que fija denominación, ámbito de competencia territorial, domicilio y calendario de instalación con las fechas en que iniciarán funciones los Servicios Locales de Educación Pública que indica.

viii) Informe financiero: de conformidad al informe financiero Nº 96/01.07.2022, con la iniciativa se realizan modificaciones normativas para ajustar la implementación de regulaciones ya existentes, las que no tienen efectos sobre el gasto fiscal. Respecto a la prórroga en el traspaso de los servicios educacionales a los Servicios Locales de Educación, la suspensión de la Evaluación de Desempeño Profesional y los instrumentos del Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente no irrogan mayor gasto fiscal debido a que su implementación se realizará con cargo a los recursos que se contemplen en los presupuestos vigentes.

En el informe complementario Nº 169/26.09.2022, las indicaciones incorporadas al proyecto de ley no irrogan un mayor gasto fiscal, pues se mantiene su implementación con cargo a los presupuestos vigentes.

En el informe financiero sustitutivo Nº 185/12.10.2022, las indicaciones ingresadas consideran una estimación cercana a los 8.488 asistentes que

podrán acceder a la bonificación extraordinaria que otorga la iniciativa, por un monto anual promedio de \$432.372 por asistente. Con lo anterior, la indicación irroga un mayor gasto fiscal de \$3.669.973 miles, que se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y de la Partida Presupuestaria Tesoro Público, en lo que faltare.

Tabla 1: Número de asistentes y bonificación promedio por categoría

Categoría	N° de asistentes Beneficiados	Bonificación Anual Promedio
Profesional	1.368	\$158.693
Técnico	2.282	\$477.349
Administrativo	2.692	\$535.416
Auxiliar	2.146	\$429.744

Finalmente, en el informe financiero complementario N° 206/15.11.2022 se establece que las indicaciones presentadas relativas a la práctica profesional de estudiantes de educación parvularia, no irrogan mayor gasto fiscal, pues no afectan las dotaciones de los establecimientos de educación parvularia.

ix) Votaciones:

- *Primer informe de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (agosto 2022):*
 - Aprobado en general y particular por 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
 - Votaron a favor: M. Arce, H. Barría, F. Bórquez, S. Concha, E. Cornejo, E. Schneider, C. Marzán, A. Placencia, H. Rey, C. Rojas, S. Schubert, D. Serrano, J. Santana.

- *Sala de la Cámara de Diputados (agosto 2022):*
 - Aprobado en general por 136 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones
Votó en contra: R. Alinco
 - En particular:
 - > Artículos 3 al 8 del proyecto (Párrafo segundo sobre la suspensión de la evaluación docente), cuya votación separada ha sido solicitada. Rechazado por 70 votos a favor, 63 en contra, 8 abstenciones.
 - > Artículo 12 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada. Aprobado por 123 votos a favor, 14 en contra, 6 abstenciones.

- *Primer informe de la Comisión de Educación del Senado (septiembre 2022):*
 - Aprobado en general y particular por 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
 - Votaron a favor: Y. Provoste, F. Espinoza, J. García Ruminot, J. Quintana y G. Sanhueza.

- *Sala del Senado (septiembre 2022):*
 - Aprobado en general por 43 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones

- *Segundo informe de la Comisión de Educación del Senado (noviembre 2022):*
 - Aprobado en particular con modificaciones por unanimidad, con excepción de las siguientes modificaciones aprobadas por mayoría:
 - Indicación 12 A) 3x1 (permisos dirigentes Colegio de Profesores)
 - Indicación 17 A) primer artículo propuesto 3x2 abstenciones (aumento de periodo para acreditación de CFT)

I.2 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El proyecto de ley consta de 10 artículos permanentes que modifican diversos cuerpos legales y 6 artículos transitorios.

De acuerdo a lo expresado por el Ejecutivo, el proyecto apunta a mejorar la implementación de los diferentes procesos relativos al traspaso de establecimientos educacionales, que no se han podido desarrollar adecuadamente o presentan atrasos, afectando el funcionamiento del sistema.

En particular, el proyecto plantea la postergación del traspaso del servicio educacional a los Servicios Locales de Educación Pública que entraron en funcionamiento en 2022 para enero de 2024.

Se realizan otras modificaciones para adecuar los efectos de tal postergación, por lo que se constituye en una ley miscelánea sobre materias del sistema educativo. Así, se consideran normas como:

- Establecer la entrega de un bono a los asistentes de la educación que verán retrasada la aplicación del Estatuto respectivo.
- Establecer para el Director de Educación Pública la facultad de ejercer las funciones de los Directores Ejecutivos de los SLEP, cuando estos últimos no han asumido sus cargos.
- Ajustar las normas para obtener el bono de incentivo al retiro y facilitar que beneficiarios con cupos de años anteriores se acojan efectivamente a retiro.

- Establecer la posibilidad de levantar la retención de la subvención escolar que procede ante el incumplimiento del pago de cotizaciones previsionales por parte de los sostenedores de establecimientos educacionales, de manera que el Ministerio de Educación entere directamente las cotizaciones.

I.3 COMENTARIOS A LA INICIATIVA

Esta iniciativa viene a responder a la situación observada en la instalación del nuevo sistema educativo y el traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública, que requieren una modificación de normas que permitan hacerse cargo de las dificultades que se han detectado y aumentar algunos de los plazos implicados para lograr que el proceso se siga dando por canales más adecuados.

Considerando que el origen de los problemas se debe a razones tan diversas como repercusiones de la pandemia, cuestiones presupuestarias y económicas, situaciones administrativas, etc., es necesario que se resuelva por esta vía de modificaciones legales una adecuación de las normas que permitan que la instalación de los SLEP se concrete bien junto con hacerse cargo de la situación del personal educativo afectado por los cambios que se den en este proceso.

Sin perjuicio de que sea atendible el tema central del proyecto de ley, este se ha ido constituyendo en una propuesta miscelánea de materias relacionadas al sistema educativo en general y no solo a los SLEP, con lo cual se fue abriendo el debate a otras normas que, en algunos casos, no tienen efecto directo en sistema educativo propiamente tal, si no que en cuestiones de los trabajadores de la educación.

A este respecto, se introdujo una norma que establece un derecho exclusivo para dirigentes gremiales del Colegio de Profesores para ausentarse de sus trabajos para ejercer sus funciones sindicales. Si bien se trata de una norma que reitera lo que el Estatuto Administrativo establece para los funcionarios sujetos a él, lo que propone el proyecto es que este derecho se extienda a todo dirigente nacional o regional del Colegio de profesores, debiendo el sostenedor, cualquiera sea su naturaleza, a entregarles las horas establecidas de permiso.

El problema con esta norma es que se pone la función gremial por sobre la función educativa del dirigente, lo que perjudica mayormente al establecimiento al que pertenezca, considerando que se le garantizan permisos entre 11 y 22 horas a la semana, según si es dirigente regional o nacional.

El segundo problema, y más grave aún, es que la norma establece explícitamente que este derecho lo tendrán dirigentes del Colegio de Profesores, lo que corresponde a una asociación gremial específica, con lo cual se deja fuera de este beneficio a los dirigentes de cualquier otra asociación gremial vinculada a la educación que no sea el Colegio de Profesores. Esto resulta en una norma discriminatoria y arbitraria y contraviene el derecho fundamental a la libertad de asociación, del cual se deriva que no se pueden establecer beneficios especiales por la pertenencia a una determinada asociación.

Se profundiza también en temas de integración de personas con discapacidad, pero de acuerdo a lo que han manifestado diversas entidades a lo largo de la tramitación del proyecto, algunas de ellas generan fuerte preocupación, pues no consideran necesariamente el financiamiento que acompañe los procesos de integración, entendidos como la inversión en formación profesional adecuada del personal, así como infraestructura de los propios establecimientos.

En este sentido, se considera que los avances que se puedan lograr en materia de integración son necesarios para una formación más completa de todos los alumnos, para igualar las oportunidades de los estudiantes y fortalecer el sistema educativo en general, pero ello necesariamente debe atender los costos que ello implica, por lo que si se establece la obligación a todos los establecimientos, el Estado debe hacerse cargo de los gastos asociados a esa obligación o bien, permitir que los privados puedan realizar los ajustes presupuestarios dentro de un marco adecuado para solventar tales costos.

Asimismo, se ha manifestado a través de diversos estudios y especialistas, que muchas situaciones que ameritan una atención educativa especial de los estudiantes, se manifiestan y son detectadas y diagnosticadas con el tiempo, por lo que en un curso se puede encontrar $x\%$ de niños con discapacidades o necesidades especiales permanentes en el año 1, pero al año 5 se ha detectado que el mismo grupo curso, con los mismos alumnos puede tener $x+2\%$ o $x+3\%$ de niños con discapacidades o necesidades especiales, porque a varios les fueron diagnosticadas entre el año 1 y el año 5.

Lo anterior implica que el establecimiento de cuotas puede terminan perjudicando la propia integración debido a que con el pasar de los años más difícil podría ser encontrar el cupo para niños que requieran adecuaciones educativas específicas para sumarse a la vida escolar pues los alumnos que venían de años anteriores ya podrían haber terminado ocupando la cuota.

Por lo mismo, también se considera que el proyecto no debiese hacer solo referencia a la discapacidad, si no que, a niños con necesidades educativas especiales permanentes, pues ello implica los mayores desafíos de integración en la actualidad y consideraría incluidos en estos casos a aquellos estudiantes que presenten discapacidad, siendo un concepto más amplio y favorable para la intención de fomentar la integración.

En un aspecto más operativo, también se ha hecho presente que la tramitación de este proyecto se está dando al mismo tiempo que vence el plazo para que los municipios terminen los contratos del personal que debe ser traspasado a los SLEP, pero como la transferencia tendría una postergación, tanto los trabajadores como los propios municipios estarían quedando expuestos a dificultades legales, pues el proyecto no considera ninguna norma transitoria que pueda resolver este controversia normativa.

I.3.1 PROPUESTA DE INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA Y COMPLEMENTA LAS NORMAS QUE INDICA RESPECTO DEL SISTEMA EDUCATIVO. BOLETÍN N° 15153-04.

- **ARTÍCULO 3º**

- Para eliminar el numeral 1 del artículo 3º que agrega un artículo 8º quáter nuevo al Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican.

- En subsidio de la indicación anterior:

Para reemplazar el inciso primero del numeral 1 del artículo 3º, que agrega un artículo 8º quater nuevo al Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican., por el siguiente:

“Artículo 8º quater. - El sostenedor respectivo deberá conceder a los dirigentes nacionales de las organizaciones gremiales de profesores los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con objeto de cumplir sus funciones gremiales fuera del lugar de trabajo.”.

Fundamento:

En la tramitación del proyecto de ley en la Comisión de Educación del Senado se introdujo la siguiente norma a partir de la indicación de la senadora Provoste y el senador Quintana:

“Artículo 8° quáter.- El sostenedor respectivo deberá conceder a los dirigentes nacionales del Colegio de Profesores los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con objeto de cumplir sus funciones gremiales fuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser inferiores a 22 horas semanales por cada dirigente de carácter nacional, ni a 11 horas por cada dirigente de una directiva de carácter regional, provincial o comunal.

El tiempo de los permisos semanales será acumulable por cada dirigente dentro del mes calendario correspondiente.

El tiempo que abarcaren los permisos otorgados a los directores de asociaciones se entenderá trabajado para todos los efectos, manteniendo el derecho a remuneración.”.

Cabe señalar que la secretaría de la Comisión planteó dudas sobre la admisibilidad de esta norma, en virtud de las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, es específico, los numerales 2 y 4 del artículo 65º de la Constitución Política de la República¹, interpretación que se considera correcta. Sin perjuicio de ello, la admisibilidad se sometió a votación, siendo aprobada por 3 votos a favor (Provoste, Espinoza y Quintana) y 1 voto en contra (Sanhueza). Por igual votación la norma fue aprobada.

¹ Art. 65º numeral 2) 2º.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.

Art. 65º numeral 4) 4º.- Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, con excepción de las remuneraciones de los cargos indicados en el inciso primero del artículo 38 bis, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes.

Respecto al fondo de la propuesta, los autores justificaron la norma es que es una réplica de la norma establecida en el artículo 31 de la Ley Nº 19.296 que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, que específicamente señala:

“Artículo 31.- La jefatura superior de la respectiva repartición, deberá conceder a los directores de las asociaciones los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con objeto de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser inferiores a 22 horas semanales por cada director de una asociación de carácter nacional, ni a 11 horas por cada director de una asociación de carácter regional, provincial o comunal o que tenga como base uno o más establecimientos de salud y por cada director regional o provincial elegido conforme al inciso 2° del artículo 17.

El tiempo de los permisos semanales será acumulable por cada director dentro del mes calendario correspondiente y cada director podrá ceder a uno o más de los restantes la totalidad o parte del tiempo que le correspondiere, previo aviso escrito a la jefatura superior de la respectiva repartición.

Con todo, podrá excederse el límite indicado en los incisos anteriores cuando se tratare de citaciones practicadas a los directores de asociaciones, en su carácter de tales, por las autoridades públicas, citaciones que deberán acreditarse debidamente si así lo exigiere la jefatura superior de la respectiva repartición. Tales horas no se considerarán dentro de aquellas a que se refieren los incisos anteriores. El tiempo que abarcaren los permisos otorgados a los directores de asociaciones se entenderá trabajado para todos los efectos, manteniendo el derecho a remuneración.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, los permisos que corresponda conceder a los directores de las asociaciones de funcionarios del Poder Judicial, se regirán por las normas que al efecto dicte la Corte Suprema por medio de un auto acordado.”.

Lo primero es señalar que la Ley Nº 19.296 es una normativa aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado, incluidas aquellos que se desempeñan en las municipalidades, en el Congreso Nacional y en el poder Judicial, por lo que se trata de una normativa que se aplica a los funcionarios públicos, no a los pertenecientes al sector privado.

La modificación que se propone busca replicar esta norma en el Estatuto de profesionales de la educación, que se aplica a quienes prestan servicios (i) en los establecimientos de educación básica y media, de administración municipal o particular reconocida oficialmente, (ii) en los de educación pre-básica subvencionados conforme al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, (iii) en los establecimientos de educación técnico-profesional administrados por corporaciones privadas sin fines de lucro, según lo dispuesto en el decreto ley Nº 3.166, de 1980, (iv) y a quienes ocupan cargos directivos y técnico-pedagógicos en los departamentos de administración de educación municipal que por su naturaleza requieran ser servidos por profesionales de la educación (artículo 1º). En resumen, aplica tanto a personal del sector público como privado.

Además, se debe señalar que este estatuto norma los requisitos, deberes, obligaciones y derechos de carácter profesional, comunes a todos aquellos ya señalados y regidos por él (artículo 3º)

En consideración a lo anterior, la norma propuesta puede considerarse arbitraria y discriminatoria, toda vez que se establece un beneficio exclusivo y específico a determinados trabajadores, en este caso, a los directores del Colegio de Profesores, cuestión que no se hace en la Ley Nº 19.296, ya que establece el derecho para *“los directores de las asociaciones”*, en general, sin señalar ninguna en específico. También es necesario considerar que el Estatuto de profesionales de la educación incluye a todos aquellos habilitados legalmente a ejercer la función docente, lo que puede darse en profesionales que no sean profesores y que podrían ser directivos de asociaciones gremiales correspondientes a su profesión de origen. Tomando en cuenta que no se establece una

exigencia de que el derecho a permiso que deberá otorgárseles no indica vinculación o concordancia alguna entre la función profesional y la gremial, no debiese establecerse ninguna distinción.

A ello se suma que el Estatuto de profesionales de la educación en materia de derechos, se refiere explícitamente a aquellos de *“carácter profesional”*, por lo que no correspondería establecer un beneficio que tiene que ver con la actividad gremial del director y no con su función profesional en esta normativa. Tampoco correspondería que los privados deban hacerse cargo de los costos y pérdida de hasta la mitad de la jornada laboral de una persona que contratan para ejercer funciones profesionales de educación para que pueda realizar actividades gremiales.

Ahora, más allá de los puntos particulares ya establecidos, es importante señalar que es reconocido como un derecho humano la libertad de asociación, lo que implica la libertad de las personas de pertenecer o no a alguna asociación, así como la obligación de que ninguna persona pueda ser objeto de beneficios, restricciones o prohibiciones por pertenecer o no a ellas, cuestión que claramente se contraviene con esta propuesta.

En razón de todos los argumentos señalados anteriormente es que se considera que la norma debiese ser eliminada del proyecto, proponiéndose que en caso de que no se suprima, ella se refiera a las asociaciones en general y no al Colegio de Profesores en particular.

- **ARTÍCULO 11º**

- Para sustituir en los incisos noveno y décimo nuevos del artículo 11º, las palabras *“discapacidad”* por la expresión *“necesidades educativas especiales permanentes.”*, respectivamente.

Fundamento:

Se considera que el concepto de necesidades educativas especiales permanentes abarca más que la sola referencia a la discapacidad y que en atención a los avances médicos en cuanto a tratamientos y diagnósticos de enfermedades, síndromes y condiciones que pueden presentar los estudiantes, la integración escolar debiera atender con mayor cuidado a quienes presentan características que pueden dificultar su aprendizaje, pero mediante un entorno adecuado en las escuelas puede desarrollar sus potencialidades con mayor seguridad y éxito.

• **ARTÍCULO 13º**

- Para reemplazar el inciso tercero nuevo del artículo 13º, por el siguiente:

“Los procesos de admisión de los establecimientos educacionales particulares pagados deberán asegurar, a partir del primer nivel de transición, que el 3% de los cupos sean prioritarios para estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes, siempre que se presenten suficientes postulaciones para cubrir dichos cupos. Para tener dicha prioridad los apoderados deberán presentar evaluaciones médicas o certificado de discapacidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la ley N° 20.422, para acreditar que el postulante presenta una discapacidad o posee necesidades educativas especiales permanentes. Lo señalado en este inciso es sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación.”.

Fundamento:

Siguiendo el argumento de la indicación anterior, se considera que se debe alentar en la justa medida la inclusión de personas con necesidades educativas especiales permanentes a las escuelas, pero ello debe hacerse también atendiendo la realidad de los diferentes

establecimientos educacionales, tomando en cuenta factores como la vulnerabilidad, ruralidad, matrículas disponibles, capacidades técnicas y profesionales, etc.

- Para reemplazar el inciso cuarto nuevo del artículo 13º, por el siguiente:
“Asimismo, los procesos de admisión de los establecimientos particulares pagados deberán priorizar a el o los hermanos de alumnos matriculados que presenten necesidades educativas especiales permanentes, para que puedan cursar sus estudios en estos establecimientos.”.

Fundamento:

Se mantiene la priorización de los hermanos, estableciendo la referencia a necesidades educativas especiales en vez de discapacidad, por considerar que es más amplio e integrador.

- **ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO**

Para reemplazar en el artículo cuarto transitorio nuevo la frase *“personas con discapacidad”* por *“personas con necesidades educativas especiales permanentes”*, y; la frase *“estudiantes con discapacidad”* por *“estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes.”*.

Fundamento:

Esta indicación va en la línea de las propuestas anteriores, buscando la concordancia del texto del proyecto con dichos cambios.

- **ARTÍCULO TRANSITORIO NUEVO**

Para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo:

“Artículo Transitorio. Los sostenedores podrán dejar sin efecto las cartas de despido, o avisos de desvinculación que, conforme al Código del Trabajo hayan sido enviados antes de la vigencia de la presente ley a los trabajadores mencionados en el inciso tercero del numeral 3 del artículo trigésimo octavo transitorio de la ley 21.040. Dichos trabajadores continuaran la prestación de sus servicios en los términos en que señalen los respectivos contratos de trabajo. El uso de esta facultad no impide que dentro de los nuevos plazos que establece la presente ley, para que los municipios traspasen el servicio de educación a los Servicios Locales de Educación, se deba proceder a la desvinculación de los trabajadores que se desempeñen en los Departamentos de Administración de Educación Municipal o en las corporaciones municipales.”

Fundamento:

La ley vigente establece que los sostenedores tienen plazo hasta el 30 de noviembre para dar aviso de desvinculación a los trabajadores en virtud del traspaso de los servicios de educación a los SLEP.

Considerando que el proyecto establece una prórroga para el cumplimiento de estos trasposos, pero a su vez la ley obliga a los sostenedores a informar los despidos, se requiere una norma transitoria que permita subsanar la situación tanto para los sostenedores como para los trabajadores implicados en la postergación del traspaso de los SLEP.

De este modo, se permite que los sostenedores den cumplimiento a la ley vigente pudiendo retractarse de esta actuación ante el nuevo escenario de plazos al que apunta esta iniciativa.

• **ARTÍCULO TRANSITORIO NUEVO**

Para agregar el siguiente artículo nuevo:

Artículo: Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo tercero transitorio de la Ley Nº 20.845, de Inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado:

a) Para reemplazar en su inciso primero, la frase final *"seis años contado desde el 30 de junio de 2017"* por la frase *"cinco años contado desde la entrada en vigencia de esta ley."*

b) Para reemplazar en su inciso segundo, la frase *"seis años contado desde el 30 de junio de 2017"* por la frase *"cinco años contado desde la entrada en vigencia de esta ley."*

I.3.2 INDICACIONES PROPUESTAS POR OTROS SENADORES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA Y COMPLEMENTA LAS NORMAS QUE INDICA RESPECTO DEL SISTEMA EDUCATIVO. BOLETÍN N° 15153-04.

- **ARTÍCULO 1**

1H.- Del Honorable Senador señor Edwards, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“El Ministerio de Educación realizará un estudio anual respecto de los avances efectuados por cada servicio local de educación y del funcionamiento del sistema en general. Este estudio incluirá los resultados académicos comparados de los estudiantes, los resultados financieros, los avances generales logrados, entre otras materias de interés educacional, administrativo y financieros. El Ministerio de Educación expondrá anualmente los resultados de estos estudios en la comisión de educación del Senado.”.

Observaciones:

Esta propuesta sería inadmisibile por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Sin perjuicio de ello, se considera que es una propuesta que debiera ser recogida por el Ejecutivo, puesto que se trata de información que podría facilitar la observación y seguimiento del desempeño del sistema educativo y anticipar la respuesta a problemas que se vayan detectando a partir de ella.

- **ARTÍCULO 2 NÚMERO 1 INCISO CUARTO PROPUESTO**

2H.- Del Honorable Senador señor Edwards, para reemplazarlo por el siguiente:

“Si después de cuarenta y cinco días hábiles desde la entrada en funcionamiento de alguno de los Servicios Locales de Educación Pública su Director Ejecutivo no hubiere asumido en el cargo, el Director de Educación Pública podrá, provisoriamente, dictar los actos necesarios para la implementación y traspaso del servicio educacional. Asimismo, podrá ejercer, de manera temporal, las funciones del Director Ejecutivo, exceptuando las establecidas en las letras c) y d) del artículo 22 de la ley N° 21.040. El Director de Educación Pública podrá delegar esta facultad en funcionarios de su dependencia, lo que no modificará la responsabilidad de dicha autoridad, sin perjuicio de la que pudiera afectar al delegado por negligencia o falta de probidad en el ejercicio de la facultad delegada. Las atribuciones establecidas en virtud de este inciso sólo podrán ser ejercidas hasta que asuma sus funciones el Director Ejecutivo del Servicio Local respectivo.”.

Observaciones:

La indicación precisa la norma ya existente sobre esta materia en el proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados, reforzando el carácter provisorio de las actuaciones que pueda realizar el Director de Educación Pública cuando el Director Ejecutivo del SLEP no haya asumido su cargo.

Además, establece una excepción expresa a que pueda ejercer funciones relativas a celebrar convenios de desempeño con los directores de los establecimientos educacionales de dependencia del Servicio Local, y a contratar y designar, así como poner término a las funciones del personal del Servicio Local y de los profesionales de la educación, asistentes de la educación y otros profesionales de los establecimientos educacionales de su dependencia, de conformidad a la normativa vigente, según corresponda.

Se considera que la propuesta de la indicación es atendible en el sentido de reforzar la excepcionalidad y temporalidad de esta medida y que responda a las necesidades más esenciales para la implementación y traspaso del servicio educacional.

Sin perjuicio de lo anterior, el impedimento de la celebración de convenios y de medidas relativas a la contratación o desvinculación del personal pueden ser un obstáculo al proceso que con esta norma se le busca dar continuidad en tanto no asuma el Director Ejecutivo, por lo que podría resultar contraproducente.

- **ARTÍCULO 3 NÚMERO 1 INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 8° QUÁTER PROPUESTO**

3H.- Del Honorable Senador señor Edwards, para reemplazar los guarismos “22” por “11” y “11” por “6”.

Observaciones:

La indicación apunta a reducir las horas de permiso garantizado que se proponen en el proyecto para los dirigentes nacionales y regionales del Colegio de Profesores para el ejercicio de sus funciones gremiales fuera del lugar de trabajo.

Teniendo en consideración lo ya expuesto en cuanto al origen inadmisible de esta propuesta así como sus reservas constitucionales por la arbitrariedad de la y discriminación de la medida y su afectación respecto a la libertad de asociación, la disminución de las horas de permiso resulta razonable, puesto que se trata de una cantidad de horas que puede llegar a implicar prácticamente la mitad de la jornada laboral y que además son acumulables.

Más allá de las consideraciones que puedan tenerse respecto a las facilidades que requieren los dirigentes gremiales para ejercer sus funciones, se debe tener en cuenta también los efectos que estos permisos tienen para la institución donde desempeñan sus funciones

profesionales, que implican al menos 88 horas mensuales para los dirigentes nacionales y 44 horas para los dirigentes regionales.

- **ARTÍCULO 4 NÚMERO 2 LETRA C) PROPUESTA**

4H.- Del Honorable Senador señor Edwards, para sustituirla por la que sigue:

“c) En igualdad de condiciones de edad, se priorizarán aquellos que padezcan algún tipo de enfermedad que les haya impedido ejercer sus funciones de manera normal en cualquier etapa de su carrera. Para efectos de la postulación, deberán ser sometidos a un examen médico a objeto de ser priorizados en términos de su respectiva dificultad para seguir desempeñando sus labores. Para estos efectos, la institución empleadora deberá informar, trescientos sesenta y cinco días inmediatamente anteriores al inicio del período de postulación, a la Subsecretaría de Educación -mediante un informe- el resultado de dichos exámenes.”.

Observaciones:

La indicación busca ampliar el plazo establecido en el proyecto respecto a la priorización según estado de salud que se hará para la bonificación por retiro voluntario.

Cabe hacer presente que, en la práctica, el proyecto no establece un cambio de criterios de la ley vigente, si no que cambia el orden de prioridad en que dichos criterios se revisarán.

- **ARTÍCULO 5 INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 8 PROPUESTO**

5H.- Del Honorable Senador señor Edwards, para suprimirlo.

Observaciones:

La norma despachada por la Cámara de Diputados faculta al Ministerio de Educación a definir beneficiarios de retiro voluntario o traspasar recursos a un mismo sostenedor para ello.

- **ARTÍCULO 7**

6H.- Del Honorable Senador señor Edwards, para eliminarlo.

Observaciones:

La Comisión de Educación del Senado introdujo una modificación en el plazo de acreditación que tienen los centros de formación técnica, pasando de seis a 10 años de conformidad a la Ley Nº 20.910, que crea quince Centros De Formación Técnica Estatales.

La indicación busca eliminar tal ampliación del plazo de los CFT para someterse al proceso de acreditación respectivo, lo que resulta atendible considerando que se trata de un trámite que se vincula a la calidad de dichos centros y repercute directamente en los estudiantes de ellos.

Si bien existen razones diversas que pueden haber incidido en la implementación e instalación de estos centros y que afectarían su capacidad de acreditación, esta es una materia que debiera tratarse de manera específica y atención a los casos particulares de los 15 CFT, sin comprometer el acceso a mejor educación de los estudiantes y el cumplimiento de las condiciones necesarias para ello.

9H.- Del Honorable Senador señor Edwards, para reemplazar la frase *“que el 5% de los cupos sean prioritarios para estudiantes con discapacidad”* por el siguiente texto: *“que el 3% de los cupos sean prioritarios para estudiantes con discapacidad registrada y 5% para niños con otras necesidades educativas especiales debidamente diagnosticadas por un profesional competente. El Ministerio de Educación dictará un reglamento para delimitar la aplicación de este inciso.”*.

Observaciones:

La indicación propone establecer dos tipos de cuotas que deberán considerar los establecimientos educacionales: un 3% para estudiantes con discapacidad y un 5% para niños con necesidades educativas especiales. El proyecto establece 5% para estudiantes con discapacidad.

Cabe tener presente que durante la tramitación de este proyecto de ley, diversos sostenedores hicieron presente las dificultades prácticas que implica establecer cuotas a todo evento, sin consideraciones a las condiciones particulares de cada establecimiento.

Esta indicación podría generar mayor presión, especialmente para los establecimientos más pequeños, por lo que es preferible mantener la propuesta actual.